

## EDITORIAL

### **Inimputabilidad sin control**

**El caso del menor de 13 años que encabezó una huida policial en La Serena reabre el debate sobre la inimputabilidad penal y el escaso seguimiento de las medidas que decretan los tribunales, cuando niños reinciden en delitos graves sin un control efectivo del Estado.**

El caso del menor de 13 años que lideró una huida policial en La Serena vuelve a instalar una discusión incómoda, pero urgente: qué ocurre cuando un niño comete delitos graves sabiendo que no enfrentará consecuencias penales. La inimputabilidad, pensada para proteger a menores y garantizar un enfoque de derechos, no puede transformarse en un vacío práctico que termine amparando conductas reiteradas y riesgosas para la comunidad y para el propio menor. Que un niño conduzca un vehículo robado, huya de la policía y registre detenciones previas por hechos similares deja al descubierto una falla estructural que va más allá del sistema penal. La ley es clara: los menores de 14 años no pueden ser condenados penalmente. Pero esa misma claridad obliga al Estado a garantizar un sistema de protección eficaz, con seguimiento real de

las medidas que dictan los tribunales de familia. Cuando esas cautelares no se monitorean o se diluyen en la burocracia, la inimputabilidad deja de ser una herramienta de resguardo y pasa a convertirse en un factor de riesgo. Órdenes de tratamiento, derivaciones a salud mental o medidas de protección no pueden quedar solo en resoluciones judiciales: requieren supervisión, coordinación interinstitucional y voluntad de ejecución. Este caso interpela al Estado en su conjunto. Proteger a niños y niñas también implica evitar que sean absorbidos por dinámicas delictuales o utilizados por adultos. El problema no es la inimputabilidad en sí, sino la ausencia de control posterior. Sin seguimiento efectivo, la ley pierde sentido y la comunidad pierde confianza. Aquí no se trata de castigar antes, sino de hacerse cargo a tiempo.